

D I C T A M E N - - 333  
Expte. N° 1997-8-88-Goberna-  
ción-H. CAMARA DE DIPUTADOS-  
SAN JUAN-E/Comunicación N° /  
105. S/informa de los conve-  
nios o tratados sobre políti-  
ca vitivinícola realizados /  
entre los Poderes Ejecutivos  
de San Juan y Mendoza.-

SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA:

Las presentes actuaciones contienen Comu-  
nicación de la Cámara de Diputados de la Provincia al Poder Ejecutivo,  
N° 105 de fecha 20/10/88, ingresada el 27 del mismo mes y año a/  
Mesa de Entradas de Secretaría General de la Gobernación, mediante /  
la cual el Poder Legislativo solicita se informe, en perentorio tér-  
mino de diez días, a través del Ministerio a su cargo, "las razones/  
por las cuales no se ha enviado a esta Cámara de Diputados, los Con-  
venios o Tratados sobre Política Vitivinícola realizados entre los /  
Poderes Ejecutivos de San Juan y Mendoza".-

De acuerdo a los artículos 150, inc. 2°,  
y 189, inc. 9° de la Constitución Provincial, corresponde intervenir  
al Poder Legislativo ante Tratados o Convenios que el Poder Ejecutivo  
acuerde con el Estado Nacional, otras Provincias o Municipios, en  
ter públicos o privados, nacionales o extranjeros, estados extranje-  
ros u organismos internacionales, para fines de utilidad común, espe-  
cialmente en materia cultural, educacional, económica y de adminis-  
tración de justicia. Las normas citadas reconocen sus antecedentes /  
en las anteriores constituciones locales aunque su espectro fue am-  
pliado en la de 1986; en efecto, la Constitución de 1878 preveía la/  
intervención del Legislativo en los Tratados que el Poder Ejecutivo/  
celebrase sólo con otras Provincias y únicamente cuando tuvieran fi-  
nes de administración de justicia o intereses económicos (art. 71 //  
inc. 2°), lo que es reiterado por la Constitución de 1927 (art. 70 /  
inc. 2°), la que ya incluye el correlativo al inc. 9° del art. 189 /  
de la Constitución actual en el inc. 10° de su art. 107.-

...  
.../11



Ahora bien, en ninguna de las Convenciones Constituyentes que sancionaron las distintas cartas fundamentales vigentes en la Provincia, fueron debatidos los alcances de esos preceptos. Tampoco se fundó en las sesiones de la Constituyente recientemente llevadas a cabo y que coincidiera con la Constitución vigente, los motivos tenidos en cuenta para ampliar el control legislativo a otros casos no contemplados por los antecedentes citados, tanto en relación a los sujetos que celebraren tratados con el Poder Ejecutivo local, cuanto en relación al objeto de esos Convenios. Lo cierto es que los textos vigentes son más explícitos que los precedentes y que, a falta de la aclaración auténtica que pudiera habernos permitido la existencia de debates (que no hubo), debe buscarse por vía interpretativa, gramatical o exegética, el alcance de los textos referidos y, en esa tarea, debe clarificarse que Tratados o Convenios deben ser sometidos al Poder Legislativo.-

En este punto se aprecian dos posibilidades: a) en una interpretación extensiva de los preceptos, todo tratado, convenio, pacto, acuerdo, contrato, etc. que celebre el Poder Ejecutivo de la Provincia con cualquiera de los otros entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, enumerados, que pudiese tener algo que ver con fines de utilidad pública, etc., debería ser remitido al Poder Legislativo para que sea, aprobado o desechado; b) con un criterio más estricto, sólo debieran remitirse aquellos relativos a las materias comprendidas dentro de las atribuciones del Poder Legislativo contempladas en alguno de los otros incisos del art.º 150 de la Constitución Provincial.-

La primera hipótesis plantaría la necesidad de tener que elevar a la Cámara de Diputados, entre otros muchos,

2...///



///...2

CONT. D I C T A M E N ~~533~~

casos tales como los contratos que celebre el Poder Ejecutivo con contratistas de Obras Públicas; con los propietarios de los vehículos / que se utilizan para movilidad de funcionarios; con proveedores del Estado e infinidad de Convenios de menor cuantía que quitarían al Poder Legislativo un tiempo valiosísimo de su función específica y desmerecería la autoridad del Ejecutivo, atentando contra la celeridad / economía y sencillez de los trámites administrativos y el principio / de división de poderes.-

La segunda respeta la estructura consagrada por la Constitución, que ha dividido la esfera de competencia / de cada uno de los poderes del Estado, procurando una armónica complementación que supone que en los ámbitos privativos de cada uno / no se inmiscuyan los otros y, a la vez, la interacción lógica en todos aquellos asuntos de importancia capital para los intereses del Estado Provincial. Nótese que las Constituciones <sup>anteriores</sup> sólo exigían la intervención de la legislatura en temas fundamentales: la administración de justicia y la economía.-

Si atendemos a los textos similares contenidos en la Constitución Nacional (art. 67 inc. 19° y 89°, inc. 14°) que prevén que el Congreso de la Nación tendrá intervención para / aprobar o desechar tratados que el Presidente concluya y firme con / las demás Naciones y los concordatos con la Silla Apostólica, advertimos que la Constitución local no sólo ha previsto el control del / Legislativo cuando el Ejecutivo trate o convenga con sus pares (como dispone la Constitución Nacional), sino también cuando el tratado o convenio se realice con la Nación (en concordancia con nuestro sistema republicano federal) pero, además, cuando ello ocurriese con poderes políticos inferiores (municipios) e, incluso, entes públicos y priva

///...///



dos (formulación demasiado imprecisa). Las diferencias son notorias/  
pués la Constitución Nacional sólo ordena la intervención del Congre-  
so cuando el Presidente de la Nación trata con representantes de o-/  
tros Estados soberanos, prescindiendo de requerirla cuando conviene/  
con los gobiernos provinciales o municipales. Obviamente presupone /  
que es- tos últimos acuerdos deberán adeou'se a la legislación vigen-  
te; en su defecto, jugarán los controles que conatitucionalmente co-  
rresponde al Poder Judicial u otros organismos especiales (Tribunal/  
de Cuenta de la Nación, Fiscalía Nacional de-Investigación Adminia-/  
trativa, etc,) , pero no al Poder Legislativo cuya importante misión  
es, precisamente, legislar y no controlar al Ejecutivo salvo en ca-/  
sos excepcionales.-

Por ello, compartimos plenamente el análi-  
sis del Señor Ministro sobre el contenido del Acta-Acuerdo en cuesti-  
ón y, enrolados sin vacilaciones en la interpretación restrictiva de los  
preceptos constitucionales citados, entendemos que ni ese Acta-Acuer-  
do, ni las que celebran los Ministros de Economía (o de otras áreas)  
con sus pares de otras Provincias, deben ser remitidos al Poder Le-/  
gislativo, sino sólo aquellos Convenios o Tratados que, por su impor-  
tancia (por la obligaciones o compromisos que supongan para el Estado  
Provincial) realmente interesen alguna de las atribuciones otorgadas  
por los otros inc-isoa del artículo 150 de la Constitución local a /  
la Cámara de Diputados, que no es el caso aquí examinado.-

En caso de participar el Señor Ministro/  
de la opinión vertida precedentemente, estimo podrá informar a la //  
legislatura que no le fue remitida el Acta-Acuerdo aludida (por otra  
parte ampliamente difundida en medios periodísticos de ambas Provin-  
cias signatarias) por no estar sujeta a la aprobación o rechazo del/  
legislativo, atendiendo su contenido.- Ello no quita que, a simple//

3...///



///...3

CONT. DICTAMEN -- 533

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS

Señor Asesoría Letrada

título informativo o de cortesía, se haga llegar a la Cámara de Diputados una copia de ese Acta y de los otros Acuerdos similares que en el futuro se pudiesen celebrar, no comprendidos en el dispositivo en el art. 150, y no. 2º, de la Constitución local.-

Sirva la presente de atenta nota de estilo.-

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO, 04 de 1988.-

Int. G.K.

OSVALDO OCTAVIO YACANTE  
ASESOR LETRADO DE GOBIERNO